

2343-D-04

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º del Código Penal, incorporándose como inciso 3º el siguiente:

3º Por delitos que deban ser perseguidos en la República Argentina, conforme a los convenios internacionales vigentes de los que ésta sea parte.

Art. 2º – Agréguese como capítulo V del título VII del libro segundo del Código Penal, el siguiente:

Capítulo V

Financiación de actos de terrorismo

Art. 3º – Agréguese en el capítulo V del título VII, del libro segundo del Código Penal, como artículo 208 bis el siguiente:

Artículo 208 bis: Será reprimido con prisión o reclusión de ocho (8) a veinte (20) años, quien proveyere, recolectare o pusiere a disposición fondos u otros activos con la intención de que se destinen, en todo o en parte, para cometer alguna de las conductas previstas en los tratados internacionales de los que la República Argentina es parte y se enuncian en el Anexo I que integra la presente ley.

Art. 4º – Agréguese en el capítulo V del título VII, del libro segundo del Código Penal, como artículo 208 ter el siguiente:

Artículo 208 ter: Será reprimido con prisión o reclusión de ocho (8) a veinte (20) años, quien proveyere, recolectare o pusiere a disposición fondos con la intención de que se destinen, en todo o en parte para causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto por su naturaleza o contexto, fuere intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Art. 5º – Modifícase el segundo párrafo del artículo 210 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de ocho (8) años de prisión o reclusión. Igual mínimo se aplicará al que proveyere, recolectare o pusiere a disposición fondos para financiar la asociación.

Art. 6º – Modifícase el primer párrafo del artículo 210 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Se impondrá reclusión o prisión de ocho (8) a veinte (20) años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación, financiación o mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por los menos dos de las siguientes características:

Art. 7º – Modifícase el artículo 213 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 213 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a ocho (8) años, el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este Código, tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el sólo hecho de ser

H. Cámara de Diputados de la Nación - Secretaría Parlamentaria
- Dirección de Información Parlamentaria

miembro de la asociación. La misma pena le corresponderá a quien proveyere, recolectare o pusiere a disposición fondos para financiar dichas agrupaciones.

Art. 8° – Modifícase el artículo 5° de la ley 25.246, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 5°: Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), que funcionará con autarquía funcional y financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Art. 9° – Modifícase el inciso *d)* del artículo 6° de la ley 25.246, el que quedará redactado de la siguiente forma:

d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, así como aquellos cometidos por las agrupaciones previstas en el artículo 213 bis del Código Penal.

Art. 10. – Agréguese como inciso *h)* del artículo 6° de la ley 25.246, el siguiente:

h) Delitos relacionados con las conductas previstas en los artículos 208 bis y 208 ter del Código Penal.

Art. 11. – Modifícase el artículo 10 de la ley 25.246, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 10:

a) La Unidad de Información Financiera estará constituida por cinco miembros. Todos ellos deberán ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de 10 años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán tener probada idoneidad en materia financiera, bancaria, o legal vinculada al área financiera y penal y gozar de reconocida solvencia moral. Serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado;

b) Conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta.

Podrán ser removidos de sus cargos, por el Poder Ejecutivo nacional, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 25.246 o por inhabilidad sobreviviente.

La remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediare mala conducta o incumpliendo de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión de 12 miembros del Honorable Congreso de la Nación. Las respectivas Cámaras dispondrán quienes serán sus integrantes.

Art. 12. – Modifícase el segundo párrafo del inciso 1 del artículo 14 de la ley 25.246, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

A la unidad de información financiera, no le podrán ser opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las informaciones solicitadas.

Art 13. – Modifícase el inciso 6 del artículo 14 de la ley 25.246, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez penal en turno el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez penal en turno el congelamiento de fondos cuando existan indicios serios y graves de que estén destinados a la financiación de hechos previstos en el inciso *h)* del artículo 6° de la presente ley, la apelación de esta medida sólo

H. Cámara de Diputados de la Nación - Secretaría Parlamentaria
- Dirección de Información Parlamentaria

podrá ser concedida con efecto devolutivo.

Art. 14. – Agréguese como incisos 11 y 12 del artículo 14 de la ley 25.246 los siguientes:

11. Disponer investigaciones de oficio, cuando del análisis de la información recibida o colectada en el ejercicio de sus funciones, surjan elementos que permitan inferir que se está en presencia de una operación inusual o sospechosa, en los términos del artículo 21 inciso *b*) de la presente ley;
12. Aplicar y verificar el cumplimiento de las medidas previstas en el artículo 18 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999, conforme lo disponga la reglamentación.

Art. 15. – Modifícase el inciso 4 del artículo 20 de la ley 25.246, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes y depositarias de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.

Art. 16. – Agréguese como inciso 19 al artículo 20 de la ley 25.246, el siguiente:

19. Los mercados de valores, Bolsas de Comercio con mercado de valores adherido, mercados de futuros y opciones, el Mercado Abierto Electrónico, y los entes de depósito colectivo de valores negociables (cajas de valores - ley 20.643).

Art. 17. – Agréguese como incisos 20, 21 y 22 del artículo 20 de la ley 25.246, los siguientes:

20. Agentes inmobiliarios;
21. Abogados cuando asesoren o ejecuten operaciones para sus clientes concernientes a: manejo de dinero, valores negociables, compraventa de bienes raíces u otros activos del cliente, manejo de cuentas bancarias, organización de aportes para la creación o administración de sociedades o asociaciones, creación o administración de personas jurídicas o compraventa de entidades comerciales;
22. Administradores de fideicomisos financieros.

Art. 18. – Modifícase el último párrafo del artículo 20 de la ley 25.246, el que quedará redactado de la siguiente manera:

No serán aplicables, ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ley o por contrato.

Art. 19. – Modifícase el último párrafo del inciso *a*) del artículo 21 de la ley 25.246, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Toda información, incluyendo los documentos sobre transacciones efectuadas tanto nacionales como internacionales, deberá archivar por un término de cinco años, según la forma y con las modalidades que establezca la Unidad de Información Financiera.

Art 20. – Agréguese como inciso *d*) del artículo 21 de la ley 25.246 el siguiente:

d) Abstenerse, en los casos que corresponda, de abrir cuentas cuyos titulares o beneficiarios no estén ni puedan ser identificados.

H. Cámara de Diputados de la Nación - Secretaría Parlamentaria
- Dirección de Información Parlamentaria

Art. 21. – Agréguese como último párrafo del artículo 22 de la ley 25.246, el siguiente:

Cuando la Unidad de Información Financiera en el desarrollo de sus funciones específicas detecte algún posible ilícito de competencia de otra repartición del Estado nacional, pondrá en conocimiento de ello al respectivo organismo, sin que ello implique violación del deber de guardar secreto previsto en el presente artículo.

La unidad de información financiera podrá posponer dicha comunicación, cuando ello pudiera poner en peligro el éxito de la investigación.

Art. 22. – Agréguese como artículo 23 bis de la ley 25.246, el siguiente:

Artículo 23 bis:

1. Será sancionada con multa de dos a diez veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiere proveído, recolectado o puesto a disposición fondos en el sentido de los artículos 208 bis y 208 ter del Código Penal.
2. Cuando el mismo hecho hubiere sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento al sesenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito.

Art. 23. – Cláusula transitoria:

- a) Los miembros actuales de la unidad de información financiera deberán ser ratificados por acuerdo del Senado;
- b) Cualquier vacante que se produzca en la actual composición de la Unidad de Información Financiera será cubierta a propuesta del Poder Ejecutivo, quien solicitará a la Administración de Ingresos Públicos una terna de nombres, para elevar uno de ellos, al acuerdo del Senado.

Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge M. A. Argüello. – Víctor M. F. Fayad. – Alberto A. Natale. – Federico Pinedo. – Rodolfo A. Frigeri. – Rafael A. González. – Jorge L. Montoya.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 25.246 sancionada en 2000 tras un arduo trabajo legislativo constituyó un avance en la modernización de nuestras instituciones y una clara señal del compromiso nacional en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas.

La actual emergencia nacional en materia de seguridad y extensión de la amenaza terrorista en el concierto internacional exigen redoblar esfuerzos que permitan eficazmente prevenir y reprimir las actividades de lavado de activos y financiamiento de las actividades terroristas.

El diseño legislativo del organismo debió ser reducido en su integración original establecido en la ley atento a la crisis económica por la que atravesaba el país; no obstante ello esta circunstancia devino favorable y eficiente a su desarrollo institucional.

En efecto, hoy a dos años vista podemos efectuar el primer balance positivo sobre su desempeño y proponer las modificaciones necesarias que permitan fortalecer la institución y reafirmar nuestro compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el flagelo internacional del terrorismo.

El presente proyecto de ley establece modificaciones al Código Penal, y a la ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y satisface los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Por estas razones proponemos tipificar el delito de

H. Cámara de Diputados de la Nación - Secretaría Parlamentaria - Dirección de Información Parlamentaria

financiamiento de las actividades terroristas, dotando a nuestra legislación de las herramientas que permitan detectarlas, prevenirlas y combatirlas ajustándola a las recomendaciones internacionales y convenios suscriptos por la República Argentina.

A partir del año 1960, las Naciones Unidas comenzaron a combatir este flagelo, promulgando diversos convenios y protocolos relativos a los actos terroristas, desde el primer Convenio sobre las Infracciones y Otros Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves (Tokio, 1963); hasta el Convenio Internacional para la Represión del Terrorismo celebrado en Nueva York en 1999; y bregan incesantemente contra el terrorismo y su financiamiento tanto a través de la Asamblea General cuanto del Consejo de Seguridad.

En tal sentido, cabe destacar la resolución 52/210 del 17 de diciembre de 1996, en la cual se exhorta a todos los Estados a que adopten medidas para prevenir y contrarrestar la financiación de terroristas y organizaciones terroristas, ya sea que se hiciera en forma directa o indirecta, por intermedio de organizaciones que tuvieran o que proclamaran tener fines caritativos, sociales o culturales, o que realizaran también actividades ilícitas de tráfico ilegal de armas, venta de estupefacientes y asociaciones ilícitas, incluida la explotación de personas, y en particular que consideraran la adopción de medidas reguladoras para prevenir y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospechara si se hicieran con fines terroristas. Estos objetivos fueron ratificados por la resolución 52/165 del 19 de enero de 1998.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el Convenio Internacional para la Represión del Terrorismo, del 9 de diciembre de 1999, donde reconoce expresamente que comete delito quien, por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados para cometer actos terroristas. El convenio insta a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para impedir que se prepare en sus territorios la comisión de tales delitos. A tal efecto enumera una serie de medidas, entre las cuales se destacan las destinadas a las instituciones financieras y otras profesiones que intervengan en las transacciones financieras a efectos que adopten medidas eficientes de control respecto de las transacciones inusuales o sospechosas.

Por su parte el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó días posteriores a los actos terroristas de Nueva York, Washington D.C. y Pensilvania del 11 de septiembre de 2001, la resolución 1.373 donde recomienda que todos los Estados prevengan y repriman la financiación de actos terroristas; tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencional de fondos –directo o indirecto– por sus nacionales o en sus territorios, con intención de que dichos fondos se utilizarán para perpetrar actos terroristas; congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo, participen en ellos, faciliten su comisión, de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos de esas personas, y de las personas o entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control –directos o indirectos– de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos.

Dicha resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas fue incorporada al ordenamiento jurídico interno por el decreto 1.235/01 del Poder Ejecutivo nacional, que en su artículo 2º dispuso la adopción de las medidas que fueren menester para dar cumplimiento a las decisiones contenidas en la resolución 1.373, entre las cuales corresponde destacar la expuesta en el punto 2. apartado e) “...asegurar que dichos actos de terrorismo queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos y que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de estos actos de terrorismo”. Esta resolución resulta vinculante para nuestro país por su carácter de Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas.

La modificación propuesta a la ley 25.246 busca adecuar la legislación nacional a las exigencias de los organismos internacionales: las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica, ampliando el marco de actuación y facultades de la Unidad de Información Financiera. Esto en consideración de que el delito de lavado de activos y

H. Cámara de Diputados de la Nación - Secretaría Parlamentaria - Dirección de Información Parlamentaria

el de financiamiento del terrorismo se diferencian por la circunstancia de que en el primer caso –blanqueo de capitales–, el origen de los fondos es siempre ilícito, mientras que para financiar el terrorismo se pueden utilizar tanto fondos lícitos como ilícitos. Sin embargo, la metodología y herramientas utilizadas en ambos delitos son idénticas, y por ello, los mecanismos e instituciones de prevención (unidades de información o inteligencia financiera) también son las mismas.

Por su parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que integra nuestro país en calidad de miembro pleno –desde junio del año 2000–, ha acordado respecto del financiamiento del terrorismo, establecer como requisito específico la ratificación y la completa puesta en práctica del Convenio Internacional para la Represión del Terrorismo, del 9 de diciembre de 1999; penalizar el financiamiento del terrorismo e incluir al terrorismo como delito previo al lavado de activos; asegurarse de que las jurisdicciones tengan la autoridad para congelar los activos terroristas; la ampliación del reporte obligatorio de transacciones sospechosas que puedan alcanzar a los fondos relacionados con el financiamiento del terrorismo y la cobertura de los varios sistemas de actividades bancarias subterráneas a través de medidas que combatan el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

A su vez, el Grupo de Acción Financiera Internacional resolvió elaborar ocho recomendaciones especiales, complementarias de sus cuarenta, para combatir la financiación del terrorismo, entre las que se encuentran: ratificación e implementación de instrumentos legales de la Organización de las Naciones Unidas; penalización de la financiación del terrorismo y lavado de dinero asociado; congelamiento y confiscación de bienes de los terroristas; reporte de transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo; cooperación internacional; remisión alternativa de información; transferencias cablegráficas y organizaciones sin fines de lucro.

Nuestro país se comprometió a adecuar su legislación interna en materia de financiamiento del terrorismo, receptando en su legislación las ocho recomendaciones adoptadas por el organismo regional del Grupo de Acción Financiera Internacional en América Latina y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica.

En junio de 2003 el Grupo de Acción Financiera Internacional aprobó la revisión de sus 40 recomendaciones y las notas interpretativas a las ocho recomendaciones especiales sobre financiamiento del terrorismo. En la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica en julio de 2003, se adoptó dicha revisión para ser aplicada respecto de los países miembros. Además, aprobó la Segunda Fase del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica contra el financiamiento del terrorismo y las notas interpretativas de las ocho recomendaciones especiales que tratan sobre la misma temática.

Este proyecto de ley a la vez que cumple con compromisos internacionales asumidos pretende constituirse en un instrumento idóneo, eficaz y eficiente para la prevención y represión del financiamiento del terrorismo y, a la vez, ubicar a la República Argentina en un lugar de vanguardia frente a distintas legislaciones comparadas.

En cuanto a la ubicación sistemática del delito de financiamiento del terrorismo, se entendió adecuado agregar un capítulo V al título VII del libro II del Código Penal, considerando de correcta técnica legislativa adicionar un capítulo al finalizar el título de los Delitos contra la Seguridad Pública. Respecto de la escala penal escogida, se tomaron como parámetro las penas establecidas en el artículo 7º de la ley 23.737 sobre estupefacientes, puesto que en ambos casos se trata de delitos graves.

La nueva metodología de evaluación de los países en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, elaborada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en consulta con el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, la Organización Internacional de Comisiones de Valores y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, establece en su punto 24 que las unidades de información financiera deben estar adecuadamente estructuradas, dotadas de fondos, con recursos humanos y tecnológicos suficientes y contar además con suficiente independencia y autonomía para asegurar que estén libres de influencia o interferencia en el desempeño de sus funciones y toma de decisiones; a la vez que la información colectada y las tareas de

H. Cámara de Diputados de la Nación - Secretaría Parlamentaria - Dirección de Información Parlamentaria

inteligencia que llevan a cabo, deben estar altamente protegidas y ser utilizadas solamente conforme lo establece la ley.

Asimismo las nuevas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional establecen que los países deberían crear una unidad de información o inteligencia financiera que se desempeñe como organismo central nacional para la recepción (y, si estuviera permitido, la solicitud), el análisis y la divulgación de reportes de operaciones Sospechosas y otras informaciones relacionadas con un posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Un organismo de tratamiento de información sobre esta materia debe tener alto profesionalismo y agilidad en la toma de decisiones para poder llevar con rapidez a la Justicia elementos de juicio de un delito de la gravedad que nos ocupa; por ello la unidad de información financiera debe tener acceso, directo o indirecto, y en oportunidad, a la información financiera, administrativa y de aplicación de la ley que sea necesaria para cumplir apropiadamente con sus funciones, incluyendo el análisis de los referidos reportes de operaciones sospechosas.

Conforme a estas exigencias internacionales, es que se debería dotar a los miembros de la unidad de información financiera de estabilidad en sus funciones, así como también debe atribuirse autarquía funcional y financiera.

Por otra parte y en consonancia con los referidos lineamientos internacionales, correspondería asignar a la unidad de información o inteligencia la competencia específica para intervenir en las cuestiones atinentes al financiamiento del terrorismo.

A su vez, la modificación de los artículos 14 inciso 1 y 20 in fine, de la ley 25.246, en lo relativo a la no oposición del secreto a la unidad de información financiera, se sustenta en la necesidad de dotar a este organismo –unidad especialmente creada para prevenir e impedir el lavado de activos, a lo que se sumaría con la presente reforma, el financiamiento del terrorismo– de los poderes y atribuciones necesarios para cumplir con eficiencia y eficacia con su objeto central cual es el análisis, tratamiento y eventual transmisión al Ministerio Público Fiscal de las operaciones calificadas como inusuales o sospechosas de lavado de activos, así como también para posibilitar el cumplimiento efectivo por parte de la unidad de información financiera, de la obligación impuesta en el artículo 15 inciso 3 de la ley citada, o sea conformar el registro único de información. Todo ello, en consonancia con las recomendaciones internacionales y profusa legislación comparada vigente en la materia, tal el caso del Acta Patriótica de los Estados Unidos respecto de Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), la ley 19/93 del Reino de España para el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), como la legislación francesa en cuanto a las facultades del Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins (Tracfin), pudiendo agregarse en América latina, respecto de las unidades análogas a la Unidad de Información Financiera argentina, las legislaciones de Colombia (ley 526/99), de Bolivia (decreto supremo 24.771), de Guatemala (decreto 67/2001), entre otras.

En relación con el secreto financiero, bursátil y fiscal que pudiera proteger a la información que requiera la unidad de información financiera, cabe señalar que continúa vigente, trasladándose de un sujeto obligado –ya sea organismo público o no– al organismo creado por ley 25.246 la obligación de mantenerlo.

La unidad de información financiera es un custodio del deber de confidencialidad de la información recibida y colectada, con una especial consideración por parte de la ley citada, atento la peculiar naturaleza, variedad y magnitud de los datos involucrados; es por esta razón que el artículo 22 de la enunciada norma legal prevé una sanción agravada por la violación de ese secreto, apartándose de la previsión general del artículo 157 del Código Penal. Este agravamiento del tipo penal manifiesta claramente la voluntad del legislador de considerar innecesaria la actuación judicial previa para levantar el secreto.

En efecto, interpretar que la unidad de información financiera en todos los casos en los que necesite información amparada por secreto –sea bancaria, fiscal o bursátil–, deba remitir a través del Ministerio Público las actuaciones al juez penal para el levantamiento del secreto, constituye la conversión del trámite en judicial contrariando la voluntad del legislador.

A los fines de la modificación del artículo 20 de la ley 25.246, en la órbita del mercado de

H. Cámara de Diputados de la Nación - Secretaría Parlamentaria
- Dirección de Información Parlamentaria

capitales se tuvo en cuenta la estructura de la ley 17.811, que consigna la autorregulación de las Bolsas de Comercio con mercado de valores adherido y de los mercados de valores, tornándose necesaria su inclusión como sujetos obligados a informar, ello en función de que dichas entidades autorreguladas tienen a su cargo la fiscalización y control directo de las sociedades emisoras que coticen sus valores (bolsas de comercio) y de los agentes y sociedades de bolsa (mercados de valores).

Igual consideración cabe formular respecto de la necesidad de incorporar como sujeto obligado al Mercado Abierto Electrónico, en virtud de la autorregulación que le fuera conferida por la Comisión Nacional de Valores, en el marco de su ley reglamentaria, atento que dicha entidad tiene a su cargo la fiscalización y control directo de los agentes del mercado abierto. En igual sentido y por las mismas razones corresponde incorporar a los mercados de futuros y opciones. También resulta indispensable la inclusión dentro de los sujetos obligados del artículo 20 de los entes de depósito colectivo de valores negociables contemplados en la ley 20.643.

Asimismo corresponde efectuar una precisión en relación a la procedencia de la inclusión en el artículo 20 de la ley, además de las sociedades gerentes de los fondos comunes de inversión, a las sociedades depositarias de dichos fondos, por cuanto éstas, en muchos casos, son las que tienen el contacto directo con los clientes y deben ser las encargadas de la implementación de la política “conozca a su cliente”.

Asimismo, es necesario considerar la incorporación de nuevas categorías de sujetos obligados a informar en concordancia con los lineamientos fijados en el ámbito internacional, en especial las Nuevas 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, por la naturaleza de ciertas actividades que se consideran claramente expuestas y que deben tener una activa participación en la prevención del lavado de activos, tales son los agentes inmobiliarios, los abogados cuando asesoren o ejecuten operaciones para sus clientes concernientes a manejo de dinero, valores negociables, compraventa de bienes raíces u otros activos del cliente, manejo de cuentas bancarias, organización de aportes para la creación o administración de sociedades o asociaciones, creación o administración de personas jurídicas o compraventa de entidades comerciales y los administradores de fideicomisos financieros.

Finalmente se propone una modificación al Código Penal de la Nación para incluir los artículos 208 bis y 208 ter dentro de las competencias de la justicia federal.

Por las consideraciones arriba expuestas y en virtud de la trascendencia institucional de las reformas propuestas solicitamos a la Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.

Jorge M. A. Argüello. – Víctor M. F. Fayad. – Alberto A. Natale. – Federico Pinedo. – Rodolfo A. Frigeri. – Rafael A. González. – Jorge L. Montoya.

ANEXO I

Convenio sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves, Tokio 1963, ley 18.730.

Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, La Haya 1970, decreto ley 19.793.

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, Montreal 1971, decreto ley 20.411.

Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, Nueva York 1973. Ley 22.509.

Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, Nueva York 1979. Ley 23.956.

Convención sobre la Protección Física de Material Nuclear, Viena 1980. Ley 23.620.

Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que prestan Servicios a la Aviación Civil Internacional, Montreal 1988. Ley 23.915.

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, Roma 1988. Ley 24.209.

Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas

H. Cámara de Diputados de la Nación - Secretaría Parlamentaria
- Dirección de Información Parlamentaria

emplazadas en la plataforma continental, Roma 1988. Ley 25.771.

Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos, Montreal 1991. Ley 24.722.

Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, Nueva York 1997. Ley 25.762.

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 9 de diciembre de 1999.

—A las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Finanzas.